

REPÚBLICA DE COLOMBIA



TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO  
DEL VALLE DEL CAUCA

ACCION	POPULAR
EXPEDIENTE	76001-23-33-004-2016-00300-00
DEMANDANTE	LUIS DIEGO MENDEZ MENDOZA Y OTRO ( <a href="mailto:osmopi53@gmail.co">osmopi53@gmail.co</a> )
DEMANDADOS	MINISTERIO DEL TRABAJO: <a href="mailto:notificacionesjudiciales@mintrabajo.gov.co">notificacionesjudiciales@mintrabajo.gov.co</a>  MINISTERIO DE TRANSPORTE: <a href="mailto:dtvalle@mintransporte.gov.co">dtvalle@mintransporte.gov.co</a> y <a href="mailto:notificacionesjudiciales@mintransporte.gov.co">notificacionesjudiciales@mintransporte.gov.co</a> .  MUNICIPIO DE CALI: <a href="mailto:notificacionesjudiciales@cali.gov.co">notificacionesjudiciales@cali.gov.co</a>  MINISTERIO DE LAS TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES: <a href="mailto:notificacionesjudicialesmintic@mintic.gov.co">notificacionesjudicialesmintic@mintic.gov.co</a>  <b>VINCULADAS:</b> SUPERINTENDENCIA DE PUERTOS Y TRANSPORTES: <a href="mailto:notificajuridica@supertransporte.gov.co">notificajuridica@supertransporte.gov.co</a> , <a href="mailto:luisfranciscoleon@yahoo.com.mx">luisfranciscoleon@yahoo.com.mx</a> .  UBER COLOMBIA S.A.S: <a href="mailto:colombianotifica@uber.com">colombianotifica@uber.com</a> , <a href="mailto:EquipoLitigiosoArbitramentoInsolvencia@bu.com.co">EquipoLitigiosoArbitramentoInsolvencia@bu.com.co</a> , <a href="mailto:fmutis@bu.com.co">fmutis@bu.com.co</a> y <a href="mailto:jcarbonell@bu.com.co">jcarbonell@bu.com.co</a> .  SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO: <a href="mailto:notificacionesjd@sic.gov.co">notificacionesjd@sic.gov.co</a>
COADYUVANTE	ROBERT TULIO HERNANDEZ LOZADA: <a href="mailto:rthl23@hotmail.com">rthl23@hotmail.com</a>
MAGISTRADA PONENTE	Dra. LUZ ELENA SIERRA VALENCIA
ASUNTO:	RESULEVE RECURSO DE REPOSICIÓN-ADMITE COADYUVANCIA

Santiago de Cali, primero (1) de julio de dos mil veinte (2020)

ANTECEDENTES

Los señores Luís Diego Méndez Mendoza y Oscar Antonio Morales Pinzón demandan en

ejercicio de la acción popular consagrada en la Ley 472 de 1998, al **MUNICIPIO DE CALI**, la **NACIÓN- MINISTERIO DE TRANSPORTE, MINISTERIO DE TRABAJO y MINISTERIO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN**, con el fin de que se ampararan los derechos colectivos a la moralidad administrativa, los derechos de los consumidores y usuarios y la seguridad pública, presuntamente vulnerados por las mencionadas entidades al permitir que la empresa UBER, los vehículos denominados piratas y los taxis con aplicación Easy Taxi, presten el servicio público de transporte en esta ciudad, sin cumplir con las exigencias legales y omitiendo el pago de impuestos, lo que a su juicio genera competencia desleal y constituye un detrimento al gremio de taxistas que legalmente prestan el mencionado servicio.

Admitida la demanda y celebrada la audiencia de pacto de cumplimiento, mediante auto de sustanciación se ordenó la vinculación oficiosa al proceso de la **SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, LA SUPERINTENDENCIA DE PUERTOS Y TRANSPORTE Y UBER COLOMBIA S.A.S** (fls.319-320 C.1A). Presentadas las respectivas contestaciones por parte de las entidades vinculadas, la sociedad UBER COLOMBIA S.A.S, solicitó la nulidad de toda la actuación por agotamiento de jurisdicción e interpuso recurso de reposición contra el auto admisorio de la demanda y contra el auto que dispuso su vinculación al presente proceso.

### **1-. La solicitud de agotamiento de jurisdicción.**

La apoderada de UBER COLOMBIA S.A.S solicita se aplique la figura jurisprudencial del agotamiento de jurisdicción, con fundamento en los siguientes argumentos:

- Que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca admitió una acción popular, con idénticas partes hechos y pretensiones a la que aquí se tramita, la cual fue interpuesta por el señor HUGO ALBERTO OSPINA AGUDELO, y radicada con el No. 2015-02152-00, por lo que considera que debe declararse la nulidad de todo lo actuado y rechazarse la demanda.
- Que efectuado el análisis de las dos demandas de acción popular, se constató que los fundamentos de hecho son idénticos, como quiera que se está reprochando la supuesta prestación del servicio público de transporte a través de la plataforma UBER, sin que se cuente con las autorizaciones legales para dicho fin. Así mismo, precisa que las pretensiones de ambas acciones buscan que se adopten medidas por parte de la Administración, para impedir la utilización de la aplicación UBER, y su consecuente bloqueo o suspensión en el territorio nacional.

-. Que tanto en la acción popular radicada con el No. 2015-02152-00 y la presente acción se persiguen el amparo de los derechos colectivos relacionados con la moralidad administrativa y la protección de los consumidores y usuarios.

-. Que conforme a la jurisprudencia del Consejo de Estado, la figura del agotamiento de jurisdicción en las acciones populares, se fundamenta en que no puede existir multitud de acciones de dicha naturaleza con la misma parte demandada, objeto y causa, en las que se pretenda la protección de los mismos derechos e intereses colectivos, pues ello implica un desgaste innecesario de la administración de justicia.

-. Que si bien los demandados no son exactamente los mismos en una y otra acción popular, ello no obsta para que se aplique la figura del agotamiento de jurisdicción, como quiera que según la jurisprudencia del Consejo de Estado este requisito se debe flexibilizar, con el fin de no dar curso a procesos con similares hechos y pretensiones.

## **2-. El recurso de reposición**

Los fundamentos del recurso de reposición interpuesto por UBER COLOMBIA S.A.S contra el auto admisorio de la demanda y el que ordenó su vinculación son los siguientes:

-. Que los demandantes persiguen la protección de un derecho particular, más no uno de carácter colectivo, como quiera que el presunto perjuicio que se reclama solo involucra al gremio de taxistas y no a la comunidad en general.

-. Que se configura una indebida escogencia del medio de control, como quiera el objeto de la demanda persigue la protección de un bien jurídico de carácter particular, lo cual torna improcedente a la acción popular.

-. Que existe falta de competencia funcional de esta jurisdicción para conocer el proceso, habida cuenta que las pretensiones formuladas en la demanda están encaminadas al amparo de los derechos particulares del gremio taxista y los hechos en que se sustentan, demuestra que no se trata de una acción popular, sino de unas alegaciones frente a un supuesto acto de competencia desleal, por lo cual la demanda debe rechazarse.

-. Que existe falta de legitimación en la causa por pasiva de UBER COLOMBIA S.A.S como quiera que no es propietaria, arrendataria o administradora de la plataforma o aplicación UBER.

## PARA RESOLVER SE CONSIDERA

### 1). La solicitud de nulidad y la aplicación de la figura del agotamiento de jurisdicción.

En el artículo 20 de la Ley 472 de 1998, se consagra solo un evento como causal de rechazo de la demanda, cual es que ella no sea corregida en el término concedido. Sin embargo, la jurisprudencia del Consejo de Estado ha decantado la figura del "agotamiento de la jurisdicción"<sup>1</sup>, como mecanismo jurídico para rechazar aquellas demandas de acción popular que se hayan interpuesto con el mismo objeto y con base en los mismos hechos de otras que ya han sido admitidas, teniendo en cuenta que en el trámite de las acciones populares no se contempla la acumulación de procesos y para evitar un desgaste de la administración de justicia.

En relación con la figura del agotamiento de jurisdicción, el Consejo de Estado en sentencia de fecha doce (12) de diciembre de dos mil siete (2007), Radicación número: 25000-23-26-000-2005-01856-01, Acción: POPULAR, Actor: NELSON GERMAN VELASQUEZ PABON, Demandado: CONCESIONARIA VIAL DE LOS ANDES S.A. Y OTROS, Consejero ponente: ENRIQUE GIL BOTERO, se consignó lo siguiente:

*"El agotamiento de jurisdicción es una figura procesal que opera de pleno derecho en las acciones populares, aunque para su formalización requiera pronunciamiento judicial y, en términos generales, se presenta en aquellos eventos en que existe ausencia absoluta de jurisdicción para definir un determinado asunto jurídico sustancial, en tanto sobre los mismos derechos, objeto y causa, ya son materia de un proceso iniciado con antelación, o que ya se encuentra fallado, circunstancia por la cual no es posible que se de un segundo proceso o un nuevo pronunciamiento sobre la misma materia. Esta figura se da, para el caso de las acciones populares, a causa de la naturaleza, contenido y alcance de las mismas que son de rango constitucional, las cuales están instituidas para la protección de los derechos colectivos frente a una eventual amenaza o vulneración a la cual se ven sometidos. Lo anterior, dado que mediante la acción popular se protegen derechos que, prima facie, se encuentran en cabeza de toda la colectividad (conglomerado social), por lo que es cierto que una vez interpuesta la acción popular, sobre determinados hechos y derechos, a través de persona -natural o jurídica- o ciudadano, éste representa a toda la colectividad en el proceso, sin que sea viable que se presenten nuevas demandas, quedando a salvo la posibilidad de que cualquier*

---

<sup>1</sup> Antes de la expedición del Código General del Proceso, la jurisprudencia enmarcaba la figura del agotamiento de jurisdicción en la causal de nulidad establecida en el numeral 1º del artículo 140 del Código de Procedimiento Civil, lo en la normatividad procesal vigente corresponde al numeral 1º del artículo 133.

*tercero intervenga como coadyuvante, en los términos del artículo 24 de la ley 472 de 1998.*

*Como se aprecia, el agotamiento de jurisdicción opera como desarrollo del principio de celeridad y economía procesal, en tanto propende por evitar que se tramiten, en forma paralela, procesos que se refieran a los mismos hechos, objeto y causa - en acciones de naturaleza pública-, en donde la primera persona que ejerce el derecho, para controvertir la respectiva situación, lo hace en representación de los demás miembros de la sociedad y, por consiguiente, dirige toda la actividad jurisdiccional al caso concreto, de tal suerte que el juez, al asumir el conocimiento del proceso, restringe la jurisdicción y la competencia de los demás funcionarios judiciales para conocer del mismo o similar asunto. En ese orden de ideas, al constatar que ha acaecido el agotamiento de jurisdicción en un determinado evento, el juez debe proceder a anular todo lo actuado en el respectivo proceso, si hay lugar a ello, y, consecuencialmente, rechazar la demanda que verse sobre asuntos ya debatidos”.*

Así mismo, en providencia del 18 de junio de 2008, el Consejo de Estado, Consejera Ponente Dra. RUTH STELLA CORREA PALACIO, reiteró:

*"La jurisprudencia de esta Sección tiene determinado que si una demanda en acción popular se presenta cuando existe otra en curso con el mismo objeto que ya ha sido notificada al demandado, opera el "agotamiento de la jurisdicción", hecho que constata el juez a partir de la identidad de actores, pretensiones y hechos.*

*Esta institución procesal fue extrapolada de la construcción que al efecto hiciera la Sección Quinta de esta Corporación en sede de contencioso electoral, sobre la base de que la identidad de demandas -que en acciones populares se presenta cuando el objeto y la causa son los mismos, con independencia de que el actor lo sea o no ya que justamente se trata de una acción pública- comporta causal de anulación del proceso posterior. Ahora, dado que los intereses en juego impiden la simple acumulación de procesos...es tarea del juez verificar si el objeto es el mismo.*

*Conforme a lo anterior, y en aplicación del principio de economía procesal y orientada en el propósito de evitar decisiones contradictorias, la Sala ha rechazado demandas populares que coinciden en sus pretensiones (petitum) y en sus fundamentos fácticos (causa petendi), al razonar que:*

*"(...) Si realmente el actor tiene interés en la protección del derecho colectivo y posee elementos de juicio adicionales a los aportados por quien primero interpuso la acción popular con el mismo objeto, tendrá la opción de coadyuvarla, según lo establecido en el artículo 24 de la ley 472 de 1998.*

*Existe identidad de demandas sólo cuando las partes, el objeto y la causa son los mismos. No obstante, en una acción popular resulta irrelevante, para definir esa identidad quién sea el actor, pues como ya se señaló, con ésta no se pretende la satisfacción de intereses individuales.*

*Carece de razonabilidad admitir una demanda presentada en ejercicio de una acción popular que tenga el mismo objeto y se fundamente en los mismos hechos de una acción que ya está en curso, para proceder luego a su acumulación, ya que acumular procesos significa acumular pretensiones, y esta sumatoria no se da cuando las pretensiones son las mismas. Es decir, en estos casos no habría propiamente una acumulación de procesos, sino una agregación de actores.*

*Admitir una demanda presentada en ejercicio de una acción popular cuando ya cursa otra con el mismo objeto no sólo implica desconocimiento del principio de economía procesal y el riesgo de que se produzcan decisiones contradictorias, sino que, además, ordenar su acumulación a otro proceso que ya está en curso, puede afectar los intereses del actor popular que originalmente interpuso la acción y que por su esfuerzo tiene derecho al incentivo, pues esto daría lugar a que una vez enteradas de su existencia, otras personas presenten la misma demanda con el fin de que ésta se acumule a la primera y así obtener parte de ese beneficio.*

*Por supuesto, será el juez en cada evento, quien debe verificar que el objeto de la nueva acción es el mismo de la que se encuentra en trámite, pues si coinciden sólo de manera parcial, sí deberá ordenarse la acumulación de las demandas, ya que la primera no agota el interés colectivo de que trata la segunda (...).*

*En tal virtud, la aplicación a los juicios populares del instituto del agotamiento de jurisdicción pretende impedir la coexistencia de procesos paralelos en tanto ello entraña una amenaza latente a la igualdad en la aplicación de la ley dado el grave riesgo de decisiones contradictorias. Se persigue, pues, evitar no sólo el innecesario desgaste de la jurisdicción, sino también el poner en tela de juicio la seguridad jurídica" ínsita a toda decisión judicial y que es el sustrato del ejercicio de la función pública jurisdiccional (art. 228 CN y art. 1 LEAJ).*

*Por lo demás, el agotamiento de jurisdicción en sede popular busca la guarda de la unidad del derecho como postulado fundamental de la facultad estatal de impartir justicia (iudicare munus publicum es). Se reitera, entonces, que:*

*"en el juicio de acción popular una vez trabada la relación jurídico procesal no pueden coexistir otros procesos sobre los mismos hechos debido a que el actor popular, cualquiera sea, representa la comunidad en el ejercicio de acción con búsqueda de protección de los derechos e intereses colectivos y no de los derechos subjetivos.*

*Por ello cuando luego del aparecimiento de un proceso, con la notificación de la demanda al demandado (s), se admite otra demanda (s) aparece un hecho contrario al agotamiento de jurisdicción, que dice que existiendo un juicio sobre determinados hechos no puede coexistir paralelamente otro sobre los mismos".*

*Con sujeción a lo expuesto, la Sala no ha dudado en declarar la nulidad de lo actuado en el segundo proceso popular, con arreglo a lo prescrito por el numeral primero del artículo 140 del CPC, aplicable por remisión expresa del artículo 165*

*del CCA y por el artículo 44 de la ley 472 de 1998 al juicio popular, por "falta de jurisdicción" siempre y cuando previamente se establezca, sin lugar a dubitación alguna, que media identidad de objeto y de causa petendi...*

*Los particulares cuando acuden al aparato jurisdiccional con el fin de que se les reconozca un derecho mediante la aplicación del ordenamiento jurídico al caso concreto, el pronunciamiento de fondo del funcionario judicial frente al problema planteado, conlleva a que con el actuar del particular quede agotada la jurisdicción, impidiendo que se pueda presentar ante ésta la misma controversia.*

*En otros términos, la nulidad debe decretarse cuando se observa por parte del operador judicial que ya ha sido agotada la jurisdicción, previa la determinación de certeza de que existe identidad de partes, objeto y de causa petendi, en sentencias con efectos inter partes, y de entidad de objeto y de causa tratándose de sentencias con efectos erga omnes." (Negrillas de la Sala).*

La anterior postura jurisprudencial fue reiterada por el Consejo de Estado en sentencia de unificación del 11 de septiembre de 2012, con ponencia de la Magistrada Susana Buitrago Valencia, en la cual se estableció:

*" ...Con apoyo en los principios de economía, celeridad y de eficacia que rige la función judicial y que por expresa disposición del artículo 5 de la ley 472 de 1998 deben orientar el trámite de las acciones populares, cuando se esté ante demandas de acción popular en las cuales se persiga igual causa petendi basada en los mismos hechos y contra igual demandado, lo que procede es dar aplicación a la figura del agotamiento de jurisdicción....*

*Es preciso que igualmente se aplique la figura del agotamiento de jurisdicción para aquellos eventos cuando se esté en presencia de una nueva demanda y de entrada el juez constata que existe cosa juzgada general o absoluta: Sentencia estimatoria debidamente ejecutoriada y por tanto con efectos erga omnes y que ahora se promueve idéntica petición judicial fundada en los mismos supuestos facticos y jurídicos y respecto del mismo demandado, o también, cuando existe sentencia ejecutoriada que si bien es denegatoria de las pretensiones y por tanto hizo tránsito a cosa juzgada relativa, es decir solo frente a esos hechos y a esas pruebas, lo cierto es que la nueva demanda coincide plenamente en estar fundada en esos mismos supuestos fácticos y probatorios...."*

En virtud de lo anterior, debe la Sala analizar si los hechos y las pretensiones de la presente acción popular y de la acción popular que cursa en el Tribunal Administrativo de Cundinamarca radicación No. 25000-23-41-000-2015-02152-00, Magistrado Ponente: Oscar Armando Dimaté Cárdenas, versan sobre los mismos hechos y pretensiones.

**1. ACCION POPULAR BAJO RADICACION No:** 76001-23-33-004-2016-003000-00, **ACTOR POPULAR:** LUÍS DIEGO MENDEZ Y OTRO, **DEMANDADO:** MUNICIPIO DE CALI, NACIÓN-MINISTERIO DE TRANSPORTE-MINISTERIO DE TRABAJO.

**ENTIDADES VINCULADAS:** MINISTERIO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN, SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, SUPERINTENDENCIA DE PUERTOS Y TRANSPORTES Y UBER COLOMBIA S.A.S

**-. DERECHOS COLECTIVOS VIOLADOS:** Se indican los derechos colectivos relativos a la moralidad administrativa y los derechos de los consumidores y usuarios, establecidos en el artículo 4 de la Ley 472 de 1998.

De igual manera, conforme quedó registrado en la audiencia de pacto de cumplimiento, los accionantes, también pretenden la protección del derecho colectivo a la seguridad pública (minuto 39:19)

**-. HECHOS:** Indica la demanda de acción popular que las entidades accionadas omiten realizar el control efectivo sobre la prestación del servicio público de transporte en la ciudad de Cali, toda vez que han sido permisivos con la operación de los vehículos particulares que utilizan la plataforma UBER para la prestación de dicho servicio, los vehículos que utilizan la aplicación EASY TAXI, y los denominados vehículos "piratas" que circulan sin restricción en la ciudad.

Argumentan que dicha situación afecta de manera grave al gremio taxista, como quiera que se encuentran en un mercado donde prima la competencia desleal, pues mientras ellos están sometidos al cumplimiento de ciertos requisitos y al pago de impuestos y seguros para la prestación del servicio público de transporte, existen otros sujetos que operan sin observar ningún requisito legal para ello.

**-. PRETENSIONES:** Las pretensiones de esta acción básicamente están encaminadas a lo siguiente:

*"... Ordene sacar las plataformas de UBER, UBER X, EASY TAXI junto con los denominados "piratas" de la malla vial de la Ciudad de Santiago Cali, por generar una desviación de la clientela y fomentar una competencia desleal en contra del gremio de taxistas o en su defecto ordenar a la Alcaldía de Santiago de Cali, que cumpla con lo establecido en la ley sobre competencia desleal y no permita el funcionamiento de las plataformas "piratas" arriba precitadas que sean las*



*empresas de taxis quienes debidamente identificadas puedan generar el transporte público a todos los usuarios del municipio de Santiago de Cali...*

*Solicito muy respetuosamente...que ordene al Ministerio de Comunicaciones en la cartera de Tecnologías de la Información de comunicaciones (Min TIC) coordinar con el MINISTERIO DE TRANSPORTE, para que se regule las comunicaciones en razón con la movilización del transporte público con el usuario para controlar la competencia desleal de las plataformas de UBER, UBER X, EASY TAXI, y demás "piratas" que utilizan las tecnologías para competir de manera desleal..."*

**ACCION POPULAR** No: 25000-23-41-000-2015-02152-00, radicada ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca. **ACCIONANTE:** HUGO ALBERTO OSPINA AGUDELO. **DEMANDADOS:** NACIÓN-MINISTERIO DE TRANSPORTE, PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA, MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES, LA SUPERINTENDENCIA DE PUERTOS Y TRANSPORTES Y LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN.

**DERECHOS COLECTIVOS VULNERADOS:** En esta acción se enuncian los derechos colectivos relacionados con LA MORALIDAD ADMINISTRATIVA, LA SEGURIDAD Y SALUBRIDAD PÚBLICAS, EL ACCESO A UNA INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS QUE GARANTICE LA SALUBRIDAD PÚBLICA, LOS DERECHOS DE LOS CONSUMIDORES Y USUARIOS Y "LA PROTECCIÓN ESTATAL A LOS PRESTADORES DEL SERVICIO PÚBLICO DE TRANSPORTE".

**HECHOS:** Indica el actor popular que a través de la plataforma UBER se presta de manera ilegal el servicio público de transporte, como quiera que no cumple con los requisitos establecidos en la legislación colombiana para ello, sin que las entidades accionadas hayan adoptado ninguna medida para frenar su operación, ocasionando no solo un escenario de competencia desleal para el gremio taxista, sino también exponiendo la seguridad de la comunidad usuaria de ese servicio.

**PRETENSIONES:** Las pretensiones formuladas son básicamente las siguientes:

- . Que se impida por todos los medios posibles la utilización de la Plataforma UBER y se ordene su bloqueo definitivo.
- . Que se adopten las medidas necesarias para que los usuarios del servicio de transporte no puedan contratar el mismo, mediante la plataforma UBER.

**TRAMITE QUE SURTIÓ LA DEMANDA:** Mediante auto del 4 de noviembre de 2015, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, admitió la acción popular radicada con el No: 25000-23-41-000-2015-02152-00, ordenando correr traslado de la misma y notificar personalmente a las entidades demandadas, por reunir los requisitos exigidos en el artículo 18 de la ley 472 de 1998 (fls. 414-420 C.1A).

Posteriormente, mediante auto del 24 de marzo de 2017 se ordenó la vinculación de la sociedad UBER COLOMBIA S.A.S (fls. 422-423 C.1).

Consultado de manera oficiosa el portal web de la Rama Judicial, se constató que dicha acción popular actualmente se encuentra a Despacho del Magistrado Sustanciador para proferir sentencia de primera instancia<sup>2</sup>.

De conformidad con todo lo anterior, evidencia la Sala que en el presente asunto no se configuran los requisitos para la aplicación de la figura del agotamiento de jurisdicción, por lo cual se negará la solicitud de la sociedad UBER COLOMBIA S.A.S.

En efecto, respecto a la identidad de pretensiones y fundamentos fácticos, se observa que si bien en las dos acciones populares, los accionantes pretenden que se ordene a la Administración sacar de operación la aplicación UBER para la prestación del servicio público de transporte, por considerarla ilegal y generar un escenario de competencia desleal para el gremio taxista, no obstante en la acción popular tramitada por este Despacho, se persigue además que se adopte la misma medida respecto del aplicativo EASY TAXI, el que no se encuentra enunciado en la acción popular tramitada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

Así mismo, las pretensiones de esta demanda están encaminadas a que el Municipio de Cali adopte medidas efectivas para el control de los vehículos denominados *piratas* que prestan el servicio público de transporte en esta ciudad.

De igual manera, respecto de los derechos colectivos vulnerados se encontró que si bien en una y otra acción se persigue la protección de los derechos colectivos a la moralidad administrativa, los derechos de los consumidores y usuarios y la seguridad pública, en la acción popular radicada con el No. 25000-23-41-000-2015-02152-00, también se invocó la protección de los derechos colectivos a relacionados con el acceso a una infraestructura

---

<sup>2</sup> <https://consultaprocesos.ramajudicial.gov.co/Procesos/NumeroRadicacion#DetalleProceso>

de servicios que garantice la salubridad pública, y “la protección estatal a los prestadores del servicio público de transporte”.

Finalmente, se advierte que no existe identidad de parte demanda, como quiera que en el presente proceso, la parte accionada se integra por el MUNICIPIO DE CALI, la NACIÓN-MINISTERIO DE TRANSPORTE-MINISTERIO DE TRABAJO-MINISTERIO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN, la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, la SUPERINTENDENCIA DE PUERTOS Y TRANSPORTES Y UBER COLOMBIA S.A.S, mientras que en la acción popular tramitada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, se demandó a la NACIÓN-MINISTERIO DE TRANSPORTE, la PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA, el MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES, LA SUPERINTENDENCIA DE PUERTOS Y TRANSPORTES Y LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN.

Así entonces, como quiera que la figura del agotamiento de jurisdicción se evalúa a partir del objeto y la causa que dio origen a la amenaza o vulneración del derecho colectivo y en este caso se estableció que tales requisitos no se acreditan, se impone negar la aplicación de dicha figura y, por ende de la solicitud de nulidad deprecada por UBER COLOMBIA S.A.S

## **2. El recurso de Reposición**

El artículo 36 de la Ley 472 de 1998, establece que contra los autos dictados durante el trámite de la Acción Popular procede el recurso de reposición, el cual será interpuesto en los términos del Código de Procedimiento Civil, hoy Código General del Proceso, el cual en su artículo 318 consagra:

*Salvo norma en contrario, el recurso de reposición procede contra los autos que dicte el juez, contra los del magistrado sustanciador no susceptibles de súplica y contra los de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, para que se reformen o revoquen.*

*El recurso de reposición no procede contra los autos que resuelvan un recurso de apelación, una súplica o una queja.*

*El recurso deberá interponerse con expresión de las razones que lo sustenten, en forma verbal inmediatamente se pronuncie el auto. Cuando el auto se pronuncie fuera de audiencia el recurso deberá interponerse por escrito dentro de los tres (3) días siguientes al de la notificación del auto.*

*El auto que decide la reposición no es susceptible de ningún recurso, salvo que contenga puntos no decididos en el anterior, caso en el cual podrán interponerse los recursos pertinentes respecto de los puntos nuevos.*

*Los autos que dicten las salas de decisión no tienen reposición; podrá pedirse su aclaración o complementación, dentro del término de su ejecutoria.*

*PARÁGRAFO. Cuando el recurrente impugne una providencia judicial mediante un recurso improcedente, el juez deberá tramitar la impugnación por las reglas del recurso que resultare procedente, siempre que haya sido interpuesto oportunamente.*

Por lo anterior, como quiera que el recurso de reposición interpuesto por UBER COLOMBIA S.A.S contra el auto que admitió la demanda y el que dispuso su vinculación al presente proceso es procedente, el Despacho analizará si dichas providencias ameritan revocarse. De la lectura del recurso interpuesto, se observa que básicamente argumenta que la presente acción popular es improcedente, por cuanto no persigue la protección de derechos colectivos, sino individuales, como quiera que el presunto perjuicio que se reclama solo involucra al gremio de taxistas, y no a la comunidad en general.

Frente a lo anterior, se advierte que aunque en la demanda se menciona como derechos colectivos vulnerados, únicamente los relacionados con la moralidad administrativa y los derechos de los consumidores y usuarios, no obstante, a través de esta acción también se persigue la protección del derecho colectivo a la seguridad pública, conforme fue aclarado en la audiencia de pacto de cumplimiento (CD minuto 39-19).

En efecto, en dicha diligencia se estableció por parte de los accionantes, que si bien esta acción constitucional denuncia la afectación que al parecer padecen los taxistas por presuntas conductas de competencia desleal en la prestación del servicio público de transporte; también involucra a la comunidad en general que usa las aplicaciones UBER, UBER X, EASY TAXI y los vehículos denominados piratas, quienes según los accionantes prestan dicho servicio sin el cumplimiento de los requisitos legales, lo cual consideran pone en riesgo la seguridad de los usuarios que a diario se transportan bajo esas modalidades.

De otro lado, en cuanto a la falta de legitimación en la causa alegada por UBER COLOMBIA S.A.S en su recurso, debe precisar el Despacho que ello no corresponde resolverlo en el escenario del recurso de reposición contra el auto admisorio de la demanda, sino al decidirse sobre el fondo del asunto mediante sentencia de primera

instancia, conforme lo establecido en el artículo 23<sup>3</sup> de la Ley 472 de 1998 y la jurisprudencia del Consejo de Estado.

Al respecto, aclara el Despacho que según la Alta Corporación “en el trámite de la acción popular no cabe, en estricto sentido, planteamiento de excepciones previas o mixtas, pues siempre deben ser decididas en la sentencia, lo cual finalmente las convierte en perentorias, en el sentido de que constituyen impositivos para la prosperidad de la pretensión o para su formulación”<sup>4</sup>.

Por lo expuesto, como quiera que los argumentos expuestos por la sociedad recurrente en su recurso de reposición, no son de recibo para el Despacho, no se revocará las providencias impugnadas.

### **3. La Solicitud de coadyuvancia.**

También se encuentra en el plenario que se presentó una solicitud de COADYUVANCIA a las pretensiones de la parte demandante, por las siguientes personas, quienes aseguran pertenecer al gremio taxista de la ciudad de Cali:

Eduardo Alfredo Calambas López  
Álvaro Jovel Robles  
Gustavo Adolfo Barona Gaviria  
Jesús Antonio Escobar  
Fabio Arturo Saldarriaga  
Luis Francisco Orobio Angulo  
José William Collazos  
Braulio Javier Espinosa Buitrón  
Henry Cardona Giraldo  
Oscar Bolaños  
Eider Perlaza  
Javier Jaramillo  
Arlecis Calambas Echeverry  
Rodrigo Cortes González  
Arturo Hernández Bravo  
Wilson Peña Sierra  
Álvaro Zabala Garzón  
Diego Guzmán Milla  
William Flores  
Álvaro Guevara Tangarife  
Bernardino Corral Plaza

---

<sup>3</sup> ARTICULO 23. EXCEPCIONES. En la contestación de la demanda sólo podrá <sic> proponerse las excepciones de mérito y las previas de falta de jurisdicción y cosa juzgada, las cuales serán resueltas por el juez en la sentencia.

En consecuencia, las pruebas pertinentes se practicarán en el mismo plazo señalado para las pruebas solicitadas en la demanda y en la contestación de la misma

<sup>4</sup> Sección Tercera, sentencia del 8 de julio de 2009, rad. 2005-01006, MP. Enrique Gil Botero.

Respecto a la coadyuvancia en las acciones populares, el artículo 24 de la ley 472 de 1998 consagra:

*ARTICULO 24. COADYUVANCIA. Toda persona natural o jurídica podrá coadyuvar estas acciones, antes de que se profiera fallo de primera instancia. La coadyuvancia operará hacia la actuación futura. Podrán coadyuvar igualmente estas acciones las organizaciones populares, cívicas y similares, así como el Defensor del Pueblo o sus delegados, los Personeros Distritales o Municipales y demás autoridades que por razón de sus funciones deban proteger o defender los derechos e intereses colectivos.*

Por lo anterior, se aceptará a las referidas personas como coadyuvantes de la parte demandante, por cumplirse con los requisitos de la norma en mención.

Como quiera que los coadyuvantes no allegaron sus direcciones para notificaciones, se ordenará al accionante **OSCAR MORALES PINZON** que porte al correo institucional del Despacho [lsierrav@cendoj.ramajudicial.gov.co](mailto:lsierrav@cendoj.ramajudicial.gov.co), las direcciones de correo electrónico y números de contacto de las personas antes mencionadas, para efectos de agotar el trámite de notificación de las actuaciones procesales.

De igual manera, se le ordenará que aporte el correo electrónico del señor del señor Luís Diego Méndez Mendoza, como quiera que no fue consignado en la demanda, y tampoco obra en otro documento del proceso.

Respecto a la solicitud de los señores OSCAR MORALES PINZÓN (accionante) y ARTURO HERNANDEZ BRAVO (coadyuvante), tendiente a que se vinculara a la Superintendencia de Industria y Comercio al presente litigio, el Despacho no realizará ningún pronunciamiento, como quiera que dicha entidad es parte en este proceso.

Por otro lado, se reconocerá personería para actuar como apoderada del Municipio de Cali, a la Dra. SUSAN CAROLINA MUÑOZ RISUEÑO, portadora de la T.P No. 138025 del Consejo Superior de la Judicatura, conforme al poder visible a folio 480 del cuaderno 1 A.

Finalmente, por cumplir con los requisitos establecidos en el artículo 76 del CGP, se aceptará la renuncia presentada por la Dra. Carmen Karina Caicedo Landazury, como apoderada del Ministerio de Transporte (fl.541 C.1A).

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Administrativo del Valle,

## **R E S U L T A D O S**

**PRIMERO: NEGAR** la solicitud de agotamiento de jurisdicción radicada por la sociedad UBER COLOMBIA S.A.S en el presente caso, por lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

**SEGUNDO: NO REPONER PARA REVOCAR** la decisión contenida en el auto admisorio de la demanda y en el auto que ordenó la vinculación de UBER COLOMBIA S.A.S al presente proceso, por las razones expuestas en esta providencia.

**TERCERO: ACEPTAR** como coadyuvantes de la parte demandante a los señores Eduardo Alfredo Calambas López, Álvaro Jovel Robles, Gustavo Adolfo Barona Gaviria, Jesús Antonio Escobar, Fabio Arturo Saldarriaga, Luis Francisco Orobio Angulo, José William Collazos, Braulio Javier Espinosa Buitrón, Henry Cardona Giraldo, Oscar Bolaños, Eider Perlaza, Javier Jaramillo, Arlecis Calambas Echeverry, Rodrigo Cortes González, Arturo Hernández Bravo, Wilson Peña Sierra, Álvaro Zabala Garzón, Diego Guzmán Milla, William Flores, Álvaro Guevara Tangarife, Bernardino Corral Plaza.

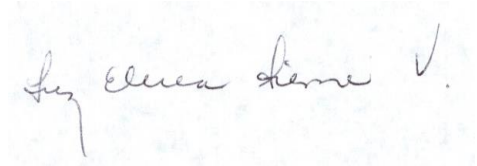
**CUARTO: SOLICITAR** al demandante **OSCAR MORALES PINZON** que allegue al correo institucional del Despacho [lsierrav@cendoj.ramajudicial.gov.co](mailto:lsierrav@cendoj.ramajudicial.gov.co), las direcciones de correo electrónico y números de contacto del señor Luís Diego Méndez Mendoza, y de las personas mencionadas en el numeral tercero de esta providencia, para efectos de notificaciones.

**QUINTO: RECONOCER** personería para actuar como apoderada del Municipio de Cali, a la abogada SUSAN CAROLINA MUÑOZ RISUEÑO, portadora de la T.P No. 138025 del Consejo Superior de la Judicatura, conforme al poder visible a folio 480 del cuaderno 1 A del expediente.

**SEXTO: ACEPTAR** la renuncia presentada por abogada Carmen Karina Caicedo Landazury, como apoderada del Ministerio de Transporte.

***NOTIFÍQUESE Y CUMPLASE.***

*La Magistrada,*

A handwritten signature in black ink on a light blue background. The signature is written in a cursive style and reads "Luz Elena Sierra V.".

***LUZ ELENA SIERRA VALENCIA***

2016-00300-00